

0093/2022

Mediante Carta de 3 de octubre de 2022, el Banco de España se dirige a esta Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) poniendo de manifiesto la solicitud de consulta pública conforme al artículo 3.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, respecto de un Proyecto de Circular del Banco de España por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, sobre la Central de Información de Riesgos ('Circular 1/2013'). En dicha carta se pone de manifiesto que el objeto de la modificación es, fundamentalmente, adaptar la Circular 1/2013a los cambios introducidos por la Orden EDT 600/2022, de 29 de junio, que modifica las fechas de entrada en vigor para la reducción de las exenciones de declaración individualizada a la CIR que establecía la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, sin perjuicio de otras modificaciones adicionales, que se especifican.

A la vista del texto del Proyecto de Circular, extraído de la página web del Banco de España, se realizan los siguientes comentarios:

La ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, establece en su art. 60, apartado Segundo, una obligación redactada en términos amplios y no muy precisos, según la cual, las entidades declarantes estarán obligadas a proporcionar a la CIR los datos necesarios para *identificar* a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito (...). No establece específicamente los datos personales que concretarían dicha identificación, pero ello puede determinarse dada la finalidad de la norma, que no es otra que evitar el riesgo de crédito de las entidades declarantes. La Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, en su artículo Segundo, establece unos datos, sin carácter exhaustivo, y no cabe considerar que obligatorios, puesto que su redacción hace referencia a aquellos datos "que se precisen para su adecuada identificación, tales como nombre, domicilio, fecha de nacimiento y código o número de identificación fiscal o similar". La Circular 1/2013, en su redacción original, y en el texto asimismo sometido a consulta (véase Norma Cuarta, apartado 1, epígrafe A.1, y Anejo 1 Módulo de Datos, A.1, Parte 1, Datos de la Persona, y Anejo 2, Instrucciones para elaborar los módulos de datos, parte 1, Domicilio), incluye como dato a reportar *por las entidades declarantes al Banco de España* el domicilio de las personas físicas.

Ahora bien, del Anejo 3 (Información de los riesgos que se facilitará a las entidades declarantes y a los intermediarios de crédito inmobiliario) de la

Circular 1/2013, cuya modificación no se propone, no resulta que el domicilio de las personas físicas sea un dato que el Banco de España haya de facilitar a las entidades declarantes en relación con el riesgo de crédito de una determinada persona y/u operación.

Esta AEPD considera, conforme al principio de minimización de datos (art. 5.1.c) RGPD), que el dato del domicilio de la persona física no debería de ser considerado entre los que la entidad declarante haya de remitir, con carácter general, al Banco de España, dado que existen datos personales más que suficientes para identificar a una persona física (nombre y apellidos, DNI/NIF, fecha de nacimiento). Sería, por tanto, por innecesario, un dato excesivo. En una ponderación entre ambos riesgos, el riesgo de dicha transmisión de datos para el derecho fundamental a la Protección de Datos personales de la persona física frente al riesgo de crédito, no parece que redunde en un beneficio para la determinación del riesgo de crédito, pues la entidad declarante ya tiene dicho domicilio y el Banco de España no lo transmite a las demás entidades declarantes (ver Anejo 3 citado). Obsérvese que del Anejo 3 tampoco se comunica el domicilio de la persona jurídica.

En consecuencia, esta AEPD sugiere que el domicilio de la persona *física* no sea uno de los datos personales que las entidades declarantes hayan de remitir al Banco de España.

Por último, en el Anejo 2, apartado A, subapartado A.1, Parte 1, Datos de la Persona, en el cuadro denominado “Estado del procedimiento legal” se hace referencia reiterada a la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y en concreto a sus artículos 71 bis, 231, 176. Todos estos artículos, y una gran parte de la ley 22/2003, han sido derogados, con efectos de 1 de septiembre de 2020, por la disposición derogatoria única.1 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.